

OTRAS VOCES

TRIBUNA | GOBIERNO El PP debe presentarse a la investidura sabiendo que va a perderla, y en segunda vuelta debería ceder los votos que Sánchez necesita para no pagar el «precio», mostrando a las claras que no son ellos quienes bloquean

Y se abrió la almoneda tras el 23-J

EMILIO LAMO DE ESPINOSA

TODO SALE A subasta. Los presupuestos, los déficits fiscales, las carreteras, los AVE y las *rodalies*, los puertos y aeropuertos, las amnistías y los indultos, los ministerios o las empresas públicas y, por supuesto, el territorio entero está en subasta. ¿Quién da más? La estrategia del *peix al cove*, inaugurada por el corrupto Pujol y su camada, es hoy obligación de cualquier líder que se precie. ¿El interés general? Qué es eso sino la suma de intereses particulares. Rousseau estaba equivocado. No conozco a la sociedad, decía Margaret Thatcher, solo individuos, personas. Pues bien, en eso estamos, aunque de otro modo. España no existe (incluso el nombre es tabú), y aquí solo hay catalanes o vascos, de izquierdas o de derechas, fascistas o rojos, machistas o mujeres, homófobos o LGTBI+, etc. No somos una sociedad sino un colección de identidades o burbujas inmiscibles que claman al tiempo: «No pasarán». Antes teníamos una sociedad dividida en clases, que primero se enfrentaban y luego aprendieron a pactar. Hoy no hay nada que pactar sino el reparto. ¿Cuál es tu «precio»? dice Ruffián. Es todo lo que cuenta.

Algo hemos hecho mal cuando unas elecciones convocadas para asegurar la gobernanza hacen que esta dependa de un prófugo de la Justicia, que lleva seis años huyendo por Europa de jurisdicción en jurisdicción. ¿Cabe mayor paradoja? Algo hemos hecho mal cuando el perdedor de las elecciones aparece henchido de felicidad y de orgullo, mientras que el triunfador se muestra apesadumbrado y casi vencido. Algo hemos hecho mal cuando los separatistas catalanes, que han recibido un gran varapalo electoral, acaban siendo los *kingmakers* de España. La mejor descripción de nuestro presente la hizo el mismo Arnaldo Otegi hace meses: es una paradoja que quien sostiene al Gobierno progresista del Estado es, precisamente, quien se quiere marchar de España. ¿Es «paradoja» la palabra adecuada?

Los socios del Gobierno, tratando de acabar con el mismo Estado con la ayuda del Gobierno.

Podemos pensar que todo ello es consecuencia de una conspiración o de un diseño perverso: garantizarse el poder a costa no de ganar elecciones, sino de ganar mayorías de diputados sumando burbujas. No es casualidad la etiqueta Sumar, pues no se trata de unir, sino de *sumar* particularidades; aunque quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Y algo de conspiración o, al menos, de diseño de *marketing* político hay detrás de todo ello. Pero prefiero pensar que, como casi siempre en los asuntos humanos, este resultado subóptimo –por decirlo en términos técnicos y fríos– es más bien la consecuencia no querida de una serie de errores y casualidades que se han ido acumulando en el tiempo. Pues

El moderno asalto a la democracia no es un asalto, sino un deterioro progresivo

no puedo creer que darle el poder a un prófugo de la Justicia sea lo que los españoles desean. Muy al contrario, han dicho claro y alto lo que desean.

Pregunta: «En su opinión, ¿los principales partidos políticos han abandonado el espíritu de consenso de la Transición y piensan ahora más en sus exclusivos proyectos e intereses partidistas que en buscar (...) lo que pueda ser más conveniente para el conjunto de nuestra sociedad?» De acuerdo: el 73%, según Metros-copia. Pregunta: «¿España necesita en estos momentos volver al espíritu de pacto y concordia de los años de la Transición para (...) llevar a cabo las reformas sociales y políticas que ahora se necesitan?» De acuerdo: el 86%. La rotundidad de las cifras (más de ocho de cada diez españoles) acredita sin la menor duda el actual rechazo a la «nueva» política de confrontación y la nostalgia de la «vieja» política de pactos y acuerdos. No se ha votado otra cosa.

Todo comenzó con los Pactos del Tinell, firmados por el PSC y ERC en 2003, por los que los firmantes se comprometían a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad –acuerdo de investidura o acuerdo parlamentario estable– con el PP en el Govern de la Generalitat. Y añadían: «Igualmente (...) se comprometen a impedir la presencia del PP en el Gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales». Es decir, el PSC (y, por lo tanto, el PSOE) se comprometía a «impedir» la presencia del PP, tanto en el Gobierno del Estado como en los de las Comunidades Autónomas. Aquella infamia antidemocrática tuvo éxito y hoy España entera es rehén de un inmenso Pacto del Tinell, hábil estrategia de los separatistas para crear una frontera que dejara fuera a los constitucionalistas. Un «cordón sanitario» que impide a la derecha cualquier acuerdo con la izquierda, forzándola a pactar sólo por su derecha: impotente si no lo hace, pero estigmatizada si lo hace. El mal llamado «bi-bloquismo» es un eufemismo que oculta que no hay un doble bloqueo: es la izquierda la que bloquea cualquier acuerdo, no la derecha. Feijóo –lo ha dicho con rotundidad– no tiene inconveniente en recibir los votos del PSOE, evidentemente, pactando. Pero su oferta solo recibe menosprecios, a pesar de haber sido el ganador de las elecciones.

Por el contrario, Pedro Sánchez se siente confirmado en sus políticas. Y no nos engañemos, los datos lo acreditan. No ha perdido votos ni escaños; los ha ganado. Ha salido reforzado, no debilitado. De modo que, si indultó, con mayor motivo puede volver a hacerlo; si facilitó realizar un referéndum ilegal, puede volver a hacerlo. Y los separatistas le han tomado la medida. ¿Acaso no dijo que jamás pactaría con Podemos y jamás pactaría con Bildu –«¿cuántas veces tengo que repetirlo?»– para decirse inmediatamente? ¿Acaso no dijo que no indultaría? Y si el precio es un referéndum, ¿por qué no pagarlo? Un referéndum consultivo –legal, pues ya no puede ser ilegal– será la prenda de su gobernabilidad, referéndum que el actual Tribunal Constitucional, con ingeniería legal y «uso alternativo del derecho», autorizará. Y que, por ser consultivo, será ganado por los separatistas, iniciando el camino hacia una plurinacionalidad que, más pronto que tarde, será republicana. El alma del PSOE («España, mañana, será republicana») habrá triunfado. Eso sí, a costa de reabrir las viejas *dos*

Españas: un frente popular apoyado por los separatistas y una confederación de derechas. Los jóvenes rebeldes antifranquistas de 1956 se agruparon bajo el eslogan de la «unión de los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos». Aquello fue un éxito. Pero, al parecer, los nietos de los vencidos se niegan a pactar con los de los vencedores y quieren tomarse la revancha. Y, por eso mismo, el PP, que debe presentarse a la investidura sabiendo que va a perderla, en segunda vuelta debería ceder los votos que Sánchez necesita para no pagar el «precio», mostrando a las claras que no son ellos quienes bloquean. ¿Qué hará el PSOE ante esa oferta? Porque, si se niega y paga el «precio», sabremos que hemos iniciado el derrumbe.

LA HISTORIA enseña que los países devienen conscientes de su inevitable deterioro cuando han pasado ya el punto de no retorno. La lechuza de Minerva toma el vuelo casi siempre al atardecer. El moderno asalto a la democracia no es propiamente un asalto, sino un deterioro progresivo, lento pero continuo, que poco a poco va *okupando* el Estado y sentando las condiciones para hacer imposible que la oposición pueda obtener una mayoría. No hay un evento, un suceso, que alerte la conciencia y muestre luces rojas. Al contrario, cada paso parece ser reversible en sí mismo, y se puede pensar que ya se arreglará el desaguisado más adelante, con otra mayoría. Incluso ese paso puede tener alguna interpretación correcta –como suele alegar el Tribunal Constitucional en sus sentencias–, aunque el objetivo manifiesto sea la interpretación incorrecta. Pero la suma de



LPO

esos pequeños pasos dificulta el retorno hasta imposibilitar la marcha atrás. Al llegar a ese punto, el Estado ha sido destruido y la «suma» de burbujas y particularismos hace almoneda del interés general.

¿Estamos cruzando ese punto de no retorno? ¿Corremos el riesgo de que los historiadores, en 20 o 40 años, recuerden estas semanas como el instante en que la democracia española comenzó a naufragar, en aras del «republicanismo luminoso» que el jefe del Ejecutivo evocaba en su autoexaltación del «épico» traslado de los huesos de Franco? ¿Podremos decir, con Ortega, que «no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa»? ¿Repetir lo de «no es esto, no es esto»?

Puede que la flecha ya haya salido del arco.

Emilio Lamo de Espinosa es catedrático emérito de Sociología